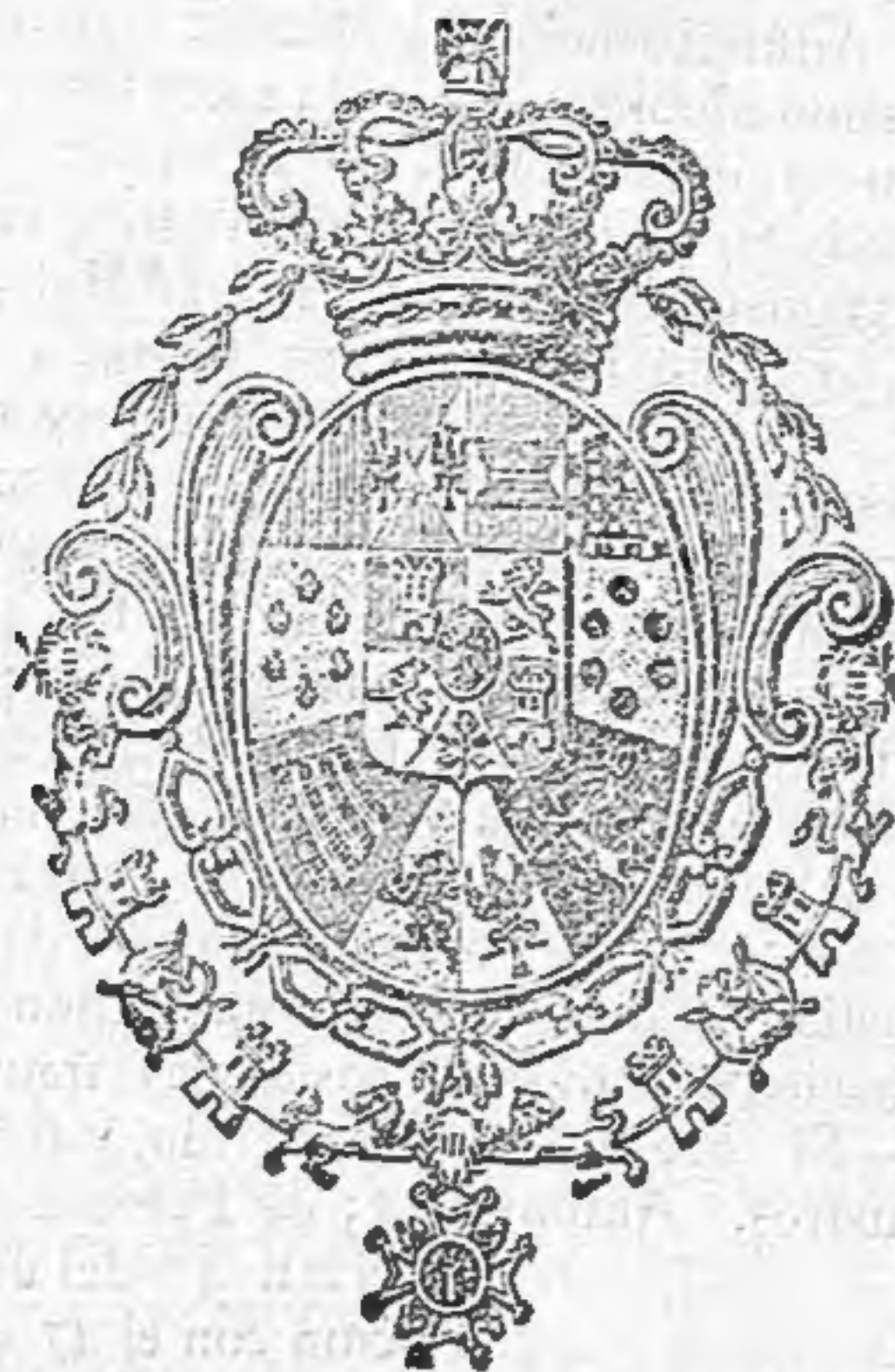


CONDICIÓN VEINTIDOS DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, Islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la ley en la *Gaceta*.
—(Artículo 1.º del Código civil).

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA

del

CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (que Dios guarde) y Augusta Real Familia continúan en San Sebastián sin novedad en su importante salud.

Gaceta núm. 257
(Gaceta núm. 256)

REAL DECRETO.

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador civil de la provincia de Leon y el Juez de instrucción de Riaño, de los cuales resulta:

Que la Guardia civil del puesto de Valmartino denunció el hecho de que don Fernando Prado, Presidente de la Junta administrativa de Villacorta, había ordenado a varios vecinos de dicho pueblo y a otros del de Soto, que cortaran en el monte denominado Ladera del Vallejo, propia de Villacorta, los pies de roble que él les designaba, apareciendo del reconocimiento, que se habían cortado 85 pies midiendo cada uno, en su mayoría, 0'80 en circunferencia por cinco metros de largo de madera aprovechable de los cuales se hallan marcados por el capataz de cultivos de la comarca 35 y los 50 restantes con marco supuesto, siendo 25 de ambas clases los extraídos por orden del Presidente de la citada Junta:

Que el Juzgado de Riaño, al que el Gobernador de Leon remitió las diligencias administrativas, instruyó la correspondiente causa, a la que se unió también la denuncia hecha por la Guardia civil ante el Ingeniero de montes, apareciendo en el proceso un oficio de la Alcaldía de Valderrueda, haciendo constar que los 60 pies de roble cortados y existentes en el

monte Ladera del Vallejo, término de Villacorta, se habían depositado en poder de un Vocal de la Junta del dicho pueblo:

Que el capataz de cultivos en el informe pericial que emitió declaró que de los 85 tocones que había reconocido resultaban 30 con el marco del distrito y los restantes sin él, que los 60 pies de roble depositados, miden 0'85 de circunferencia por 5'50 de altura por término medio: que cubiertos en rollo dan 18'73 metros cúbicos tasados en 180'78 pesetas, apreciando en igual cantidad los daños causados en el monte por la corta y extracción sin que hubieran resultado perjuicios:

Que en la declaración prestada ante el Juzgado por el capataz de cultivos manifestó éste que el valor de los 85 robles cortados es de 266'05 pesetas; y el de los 25 extraídos 78'25 pesetas; que en la corta no se ha irrogado perjuicio al monte, que los daños causados los calculaba en 266'05 pesetas; que 33 robles tenían el marco que se usa en el distrito para señalar los árboles que han de ser aprovechados en tiempo oportuno y los 52 restantes una poca labra y unas picaduras que quieren imitar el marco; que los robles extraídos con marco verdadero ascienden a 9, quedando, por tanto, 16 con marco distinto; que el valor de estos 16 lo tasaba en 50'08 pesetas, y en otro tanto los daños causados en el monte, y el de los 9 sustraídos con marco verdadero en 28'17 pesetas, en cuya cantidad calculaba también los daños en el monte con su corta y arrastre:

Que entre los antecedentes traídos al sumario hay una certificación del Ayuntamiento de Valdeurreda haciendo constar que en 5 de Diciembre de 1888 tuvo lugar la subasta de los productos maderables concedidos a los pueblos del distrito por el Ingeniero Jefe de la provincia en el plan general de 1888-89, y fueron adjudicados a Juan Fernandez Díez los cinco metros cúbicos de madera de roble concedidos al pueblo de Villacorta:

Que hallándose el Juzgado practicando las diligencias del sumario que estimaba oportunas, fué requerido de inhibición por el Gobernador de la provincia a instancia de D. Fernando Prado, y de acuerdo con la Comisión provincial, fundándose el requerimiento en que no había habido en la

extracción de productos exceso sobre lo consignado para el pueblo de Villacorta en el plan forestal de 1888-89, no correspondiendo, por lo tanto a los Tribunales ordinarios el conocimiento del hecho porque en si no constituye delito de hurto, puesto que si cortaron 85 metros, no habían sido éstos sacados del monte en su totalidad; en que el castigo que merecerían los que verificaron la corta, sería de una multa igual al valor de los productos decomisándose estos, además de exigirles la indemnización de daños y perjuicios; en que suponiendo que las maderas extraídas del monte no fueran de las marcadas o señaladas por el capataz de cultivos para el aprovechamiento o hubieran sido éstos en mayor cantidad que las marcadas, existe una cuestión previa que corresponde decidir y resolver a la Administración, determinando el alcance de la concesión otorgada por la misma y si los vecinos de Villacorta y Soto, y en su representación el Presidente de la Junta administrativa de los primeros, se ajustaron a las ordenes recibidas de aquella; en que mientras estos particulares no se depuren en el correspondiente expediente administrativo, subsiste la cuestión previa, puesto que si no hay delito por virtud de la concesión, ni los daños causados en el monte exceden de 2.500 pesetas, el Gobierno de provincia y la Alcaldía son competentes para conocer de las denuncias, imposiciones y exacciones de las multas y demás responsabilidades; en que correspondiendo a los pueblos de que se trata el uso gratuito de los productos del monte Cadera del Vallejo, por hallarse exceptuado de la venta como propio del mismo por el Estado, si ha habido contravención a los preceptos legales a que debe sujetarse el aprovechamiento, deberá el pueblo abonar como multa el valor de los productos aprovechados, pero en manera alguna podrán los vecinos ser castigados como reos de hurto toda vez que no se aprovecharon de cosa ajena, y si de una propiedad suya, aunque para ello debieran tener presentes las limitaciones consignadas en los reglamentos; el Gobernador citaba los artículos 4.º, 32 y 40 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884; el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887 y una decisión de competencia;

Que tramitado el incidente, el Juzgado sostuvo su jurisdicción, alegando: que cuando los productos han sido extraídos con ánimo de lucrarse, y cuando la infracción ha sido medio de perpetrar un delito definido en el Código, lo cual sucede en el presente caso, el conocimiento del hecho corresponde a los Tribunales ordinarios; que no es admisible la doctrina de que hallándose un monte exceptuado de la venta, no pueden ser tratados los vecinos del pueblo como reos de hurto, por no haberse aprovechado de cosa ajena, pues semejante doctrina, a más de confundir el dominio público con el privado, sentaría el precedente de que la vecindad da derecho a cortar y extraer productos forestales del monte, cuyo aprovechamiento corresponde a un pueblo como entidad moral o persona jurídica, sin más responsabilidades que las establecidas en las ordenanzas, lo cual es contrario al espíritu de las mismas; que no se trata de maderas extraídas por un concesionario fuera de la concesión, sino de maderas para cuya extracción se ha falsificado el marco usado por los dependientes del ramo de montes; que la cuestión previa, en todo caso, tenía que considerarse como resuelta desde el momento en que el Gobernador había remitido al Juzgado las diligencias practicadas de orden suya; por considerarse incompetente para conocer del hecho; que dirigiéndose en el presente caso la investigación principalmente a depurar el hecho de la falsificación del marco o signo usado por los empleados del ramo de montes para señalar las maderas aprovechables, puntualizando la participación que hayan podido tener determinadas personas, y constituyendo tal hecho un delito común, previsto y definido en el Código penal, cuyo fallo no depende en manera alguna de cuestión previa que tenga que resolver la Administración, es evidente que su conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria; el Juzgado citaba, además de las disposiciones contenidas en el oficio de requerimiento, el artículo 289 del Código penal y el 10 de la ley de Enjuiciamiento criminal:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 3.º del Real decreto de

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS
EXCEPTO LOS DOMINGOS

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN

Un trimestre dentro y
fuera de la capital. . . 5 ptas
Números sueltos. 0'25
Se admiten suscripciones en la
Imprenta LA POPULAR, Orense.

8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa, de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Vista la sección 2.^a, cap. 1.^o tit. 4.^o del Código penal que define y castiga la falsificación de sellos y marcos;

Visto el art. 92. del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, según el cual los pueblos á quienes corresponda el uso gratuito de los productos de los montes no procederán á ejecutarlo sin la autorización del Jefe del distrito, el cual la concederá cuando se le presente la carta de pago del 10 por 100 del importe de lo que haya de aprovecharse, según dispone el art. 6.^o de la ley de 11 de Julio de 1877, y con las excepciones que en el mismo artículo se preceptúan. Los que contravinieren esta disposición abonarán como multa el valor de los productos aprovechados:

Visto el art. 40 del propio Real decreto, con arreglo á cuyas disposiciones son Autoridades competentes para conocer de las denuncias, imposiciones y exacciones de las multas y demás responsabilidades prescritas en los artículos anteriores los Gobernadores civiles de las provincias y los Alcaldes con sujeción á las reglas siguientes:

1.^a Las multas y demás responsabilidades relativas á la roturación, corta, venta ó beneficio de aprovechamientos forestales, sin la autorización competente al modo ó tiempo de efectuar dichas operaciones, y á las infracciones que se cometan de las reglas establecidas para la celebración de las subastas, serán impuestas por los Gobernadores

2.^a Las multas y responsabilidades pecuniarias de las demás clases de infracciones serán impuestas por los Alcaldes cuando su importe no exceda del límite para que la faculte la ley Municipal; las que excedan de dicho límite deberán ser impuestas por los Gobernadores.

3.^a De los daños causados en los montes públicos, cuyo importe exceda de 2.500 pesetas, conocerán los Tribunales de justicia, con arreglo á las prescripciones del Código

4.^a Cuando la infracción de un precepto de las leyes y disposiciones vigentes que tenga penalidad señalada haya sido el medio de perpetrar un delito definido en el Código penal, se reservará su castigo á los Tribunales.

Considerando:

1.^o Que la causa cuya formación ha dado lugar á la presente contienda jurisdiccional, versa sobre la extracción de maderas del monte Ladera del Vallejo, y sobre la falsificación del marco usado por el capataz de cultivos para señalar las maderas aprovechables;

2.^o Que á la Administración corresponde determinar si el aprovechamiento de las maderas concedidas á los vecinos de Villacorta se ha verificado conforme á los términos de la concesión, ó si por el contrario, ha habido exceso al verificar el aprovechamiento.

3.^o Que en tal concepto, existe una cuestión previa administrativa, de la cual puede depender el fallo que en su día hubieren de dictar los Tribunales:

4.^o Que no sucede lo propio en cuanto al otro hecho objeto del procedimiento, toda vez que los Tribunales pueden resolver sobre la falsificación del marco usado por el capataz de

cultivos, sin que la Administración haya de resolver cuestión alguna.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración en lo que hace referencia al aprovechamiento de maderas en el monte Ladera del Vallejo, y á favor de la Autoridad judicial en lo que se relaciona con la falsificación de que se trata en la causa.

Dado en San Sebastian á diez de Septiembre de mil ochocientos noventa.—*Maria Cristina*.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

Gaceta núm. 220.

CONSEJO DE ESTADO

REAL DECRETO

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino,

A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed que he venido en decretar lo siguiente:

En el pleito que, en única instancia, pende, ante el Consejo de Estado, entre Don Bernardo del Junco, representado por el Doctor D. Bernardo de Frau y la Administración general, y en su nombre mi Fiscal, coadyuvado por D. Juan Andreu y Valdes, á quien representa el Licenciado D. Acacio Charrin, sobre revocación ó subsistencia de la Real orden expedida por el Ministerio de Ultramar en 3 de Julio de 1883, que declaró á D. Bernardo del Junco sin derecho á hacer uso de las prerrogativas de dueño del oficio Escribanía pública abstrita al Juzgado de Jesús y María de la Habana.

Visto:

Visto el expediente gubernativo, del que resulta:

Que en 1871 D. Bernardo del Junco dueño de una escribanía pública abstrita, al Juzgado de Jesús y María de la Habana, necesitando atender al restablecimiento de su salud, nombró Teniente suyo para el despacho de la escribanía á D. Juan Andreu, expidiéndosele un título provisional, que fué confirmado por la Superioridad:

Que D. Juan Andreu vino desempeñando esta Escribanía, y en 23 de Octubre de 1882 don Bernardo del Junco presentó una instancia al Presidente de la Audiencia de la Habana manifestando que, restablecido de las enfermedades que le obligaron á pedir licencia y nombrar sustituto, pedía se le tuviese por presentado para continuar en el ejercicio de sus funciones, y se dirigieran las oportunas comunicaciones al Colegial don Francisco de Castro, que accidentalmente le sustituye, y á su Teniente Andreu, para que le hiciera formal entrega de su protocolo; y aunque don Juan Andreu se opuso á esta pretensión, la Sala de gobierno de la Audiencia, de conformidad con el dictamen del Fiscal, acordó en 3 de Noviembre del mismo año que don Bernardo del Junco estaba en aptitud de encargarse de su Escribanía y Notaría públicas, librándose en su consecuencia las órdenes oportunas, que tuvieron dicho cumplimiento:

Que contra esta resolución presentó escrito de súplica don Juan Andreu, pidiendo reforma de lo resuelto; y la Sala, de acuerdo también con el Fiscal, confirmó en 22 de Noviembre su re-

solución anterior, pudiendo el interesado sacar las certificaciones que desee:

Que en vista de esta resolución don Juan Andreu, en 20 de Enero de 1883, acudió al Ministerio de Ultramar con larga instancia, en la que, haciendo historia de todo lo ocurrido, é invocando las prescripciones legales que creía conveniente, concluía pidiendo se declarase: 1.^o que don Juan Andreu, como Notario que estaba ejerciendo á la publicación de la Ley del Notariado las dos fes judicial y extrajudicial, tiene derecho á seguir ejerciendo estas funciones hasta su muerte ó cesación legítima, según el art. 1.^o de los disposiciones transitorias de la Ley del Notariado, y 6.^o y 8.^o del decreto de 25 de Febrero de 1874, 2.^o, que según el art. 4.^o del decreto referido, en relación con el 47 de la Ley Notarial, don Bernardo del Junco no ejerce atributos de dominio, ni puede por tanto hacer uso de las prerrogativas y facultades que le concedía el título de propiedad; 3.^o, que la Sala de gobierno de la Audiencia no ha podido decretar la separación de don Juan Andreu, privándole del cargo de Notario que ejercía, porque su separación no ha sido decretada por ninguna de las causas que señala el art. 6.^o del reglamento del Notariado; 4.^o, que por lo tanto la Sala no ha podido ordenar la entrega á don Bernardo del Junco de la Notaría y Escribanía que venía desempeñando Andreu, pues ta entrega es la autorización mas completa del uso de una facultad de que le han privado las disposiciones citadas; 5.^o, que la Sala no ha debido resolver lo pedido por Junco por depender exclusivamente esta facultad del Gobierno de S. M., y menos ha debido dar carácter ejecutivo á esta resolución, y 6.^o, mandar se libre el oportuno despacho á la Sala de gobierno de la Audiencia de la Habana para que haga entrega á don Juan Andreu de las actuaciones y protocolos de que fué privado por disposición de la misma Sala, á cuya instancia acompañaba varios documentos, y pedía se reclamaran nuevos antecedentes de la Audiencia de la Habana.

Que tramitado este asunto, de conformidad con el Negociado y la Sección de Ultramar del Consejo de Estado, se dictó la Real orden de 3 de Julio de 1883, por la que se declaró que D. Bernardo del Junco no puede hacer uso de una de las prerrogativas que llevaba consigo el derecho de propiedad del oficio, cual es la de remover del mismo á D. Juan Andreu, y que, por tanto, es de estimar la solicitud de este interesado:

Vistas las actuaciones contenciosas de las que aparece:

Que contra esta Real orden presentó demanda contenciosa en nombre de don Bernardo del Junco el Doctor D. Bernardo de Frau, que, declarada procedente, amplió después pidiendo que con revocación de dicha Real orden se declare que al volver á encargarse personalmente del desempeño de su oficio D. Bernardo del Junco, obró en uso del perfecto derecho que le correspondía como propietario del mismo, para volver á ejercer debidamente ambas fes en el goce de todos los derechos concedidos por la ley y Reglamento del Notariado vigentes en la isla de Cuba, á la que á la fecha de su planteamiento estaban desempeñando los oficios de la fe pública:

Que emplazado Mi Fiscal para que contestase la demanda, pidió se absolviera de la misma á la Administración, declarando en su virtud subsistente el precepto ministerial impugnado:

Que personado en el pleito el Licenciado D. Acacio Charrin en nombre de don Juan Andreu como coadyuvante de la Administración, emplazado para que

contestase la demanda, formuló análogo gas peticiones que Mi Fiscal:

Que habida por contestada la demanda por el Licenciado Charrin, se recibió el pleito á prueba á petición del Doctor Frau para justificar el hecho de que D. Juan Andreu, en los instrumentos que autorizaba, consignaba que lo hacía como *Teniente de Junco y para el protocolo de éste*, proponiendo al efecto una diligencia de inspección ocular del protocolo, para cuya práctica se dió comisión al Juez de primera instancia, Decano de los de la Habana, y practicada la prueba con citación contraria, resulta que D. Juan Andreu empezó á funcionar en 21 de Febrero de 1871, folio 149, primer tomo del protocolo de ese año, usando la siguiente fórmula: «Ante mí, el escribano público y testigos, etc., con excepción del...» «cibo público, folio 451 vuelto, otorgado ante el por el escribano don Antonio Mendoza en 31 de Mayo de dicho año, en el que se consigna que notificado D. Bernardo del Junco respecto á la entrega del testamento y codicilo *in scriptis* de doña Felicitas Ramirez de Vega, dijo se entendieran con Andreu, como su Teniente, en cargo de su Escribanía, y en el tomo tercero de ese año, folio 1.181, aparece una licencia para matrimonio otorgada por el Licenciado D. Jose Dolores Ponce, á favor de un hijo, ante el Escribano Andrea, Teniente de público y testigos, etc., y á su reverso una escritura fechada en Diciembre del 71, otorgada por D. Juan Santirioo y Santos, cuyo encabezamiento dice así: «Ante mí, el Teniente de Escribano público y testigos, etc.,» fórmula que vino observándose por Andreu en todos los demás instrumentos hasta el año 1874, tomo segundo, que empieza con la diligencia de apertura su protocolo, hallándose á continuación la primera escritura, fecha 7 de Abril, que encabeza así: «Ante mí, D. Juan Andreu, Notario, con residencia y vecindad en esta capital, y testigos, etcétera.» fórmula ésta que continuó usando hasta el año 1876, primer tomo, fecha 10 de Marzo, en que aparece una escritura encabezada así: «Ante mí, D. Juan de Andreu, Notario, con residencia y vecindad en esta capital, encargado del protocolo de la Escribanía de D. Bernardo del Junco, de quien soy Teniente, y de los testigos, etc.,» cuya fórmula vino siguiendo Andreu hasta el año 1882, día 5 de Agosto, última escritura autorizada por el referido D. Juan Andreu, folio 1.543.»

Que como prueba se unieron asimismo á los autos tres copias de escritura otorgadas por Andreu respectivamente en 11 de Octubre de 1876, en 13 de Agosto de 1877 y 20 de Abril de 1880, en cuyos encabezamientos se lee en la primera: «Ante mí, D. Juan Andreu, Notario con residencia y vecindad en esta capital, encargado del protocolo de escrituras públicas de la Escribanía de D. Bernardo del Junco, de quien soy Teniente, y de los testigos que se dirán...»; en la segunda: «Ante mí, D. Juan Andreu, Notario, con residencia y vecindad en esta capital, encargado del protocolo de escrituras públicas de la Escribanía de D. Bernardo del Junco, de quien soy Teniente, y de los testigos que se mencionarán...»; y en la tercera: «Ante mí, D. Juan Andreu, Notario, con residencia y vecindad en esta capital, encargado del protocolo de escrituras de la Escribanía de D. Bernardo del Junco, de quien soy Teniente, y de los testigos que se mencionarán...»; cuyos documentos se pusieron todos de manifiesto á las partes al solo efecto de instrucción:

Visto el art. 9.^o del Decreto de 25 de Febrero de 1874, según el que desde el 1.^o de Abril próximo en que

debe plantearse la nueva ley del Notariado, queda terminantemente prohibido en las islas de Cuba y Puerto Rico el ejercicio de todas y cada una de las prerrogativas que lleva consigo la propiedad de los oficios enajenados de la fe pública:

Visto el art. 6.º del citado decreto disponiendo que los nombramientos verificados y aprobados con anterioridad al planteamiento de la ley del Notariado, y que son consecuencia del derecho particular de propiedad, surtirán sus efectos legales con sujeción a las prescripciones de dicha ley, y particularmente a lo que se dispone en las transitorias de la misma y del Reglamento general para su ejecución.

Vista la primera de las disposiciones transitorias de la ley del Notariado para Cuba y Puerto Rico, en la que se establece que todos los que al tiempo de la publicación de estas disposiciones desempeñasen, mediante el correspondiente título, las dos fes, judicial y extrajudicial, continuarán ejerciendo las mismas funciones:

Considerando que la cuestión planteada en este pleito está reducida a determinar si con arreglo a la ley del Notariado que comenzó a regir en las islas de Cuba y Puerto Rico en 1.º de Abril de 1874, D. Bernardo del Junco, propietario de una Escribanía pública adscrita al Juzgado de Jesús y María de la Habana, que por causa de enfermedad estaba sirviendo D. Juan Andreu en concepto del Teniente del propietario puede o no hacerse cargo del desempeño personal de la misma:

Considerando que para resolver esta cuestión es preciso tener en cuenta, por una parte, el carácter y condiciones del nombramiento de D. Juan Andreu y de las facultades que éste tenía; y por otra, las prescripciones del decreto de 25 de Febrero de 1874, y las disposiciones transitorias de la citada ley del Notariado:

Considerando que D. Juan Andreu, nombrado por D. Bernardo del Junco en 1871 para servir como Teniente el oficio de que aquél era propietario durante su enfermedad, no tuvo, ni pudo tener otros derechos que los que arrancaban de este nombramiento circunstancial, en virtud del que, si bien aparecía sirviendo el oficio, era en nombre y representación del propietario don Bernardo del Junco, condición precaria y accidental reconocida por el mismo y demostrada por el hecho de que, según resulta de autos, al otorgar Andreu los documentos públicos, expresaba en el encabezamiento que intervenía en ellos como Teniente del Junco y para su protocolo.

Considerando que esta manera de servir el oficio llevaba necesariamente implícita la condicional de cesar en él tan pronto como Junco revocase los poderes que al efecto le había otorgado:

Considerando que reconocido que el título de Andreu no tenía otras facultades que las indicadas, no es posible ampliarlo en buenos términos de derecho a concederle el carácter y condición de Escribano y Notario en propiedad, porque esto implicaría un verdadero despojo de los derechos de Junco, sin que éste hubiera hecho renuncia ni cesión alguna de los mismos:

Considerando que este criterio no se opone en lo más mínimo a las prescripciones del Decreto de 25 de Febrero de 1874 prohibiendo en las islas de Cuba y Puerto Rico el ejercicio de todas y cada una de las prerrogativas que llevaba consigo la propiedad de los oficios enajenados de la fe pública, porque D. Bernardo del Junco, que no se había desprendido de la propiedad de su oficio, se limitó a revocar el nombramiento hecho en favor de su Teniente Andreu y pedir

se le entregase el protocolo, para lo cual le asistía perfecto derecho:

Considerando que no tienen aplicación alguna para favorecer las preensiones de Andreu las disposiciones transitorias de la Ley del Notariado antes citada, que establecen que todos los que al tiempo de la publicación de estas disposiciones desempeñasen, mediante el correspondiente título, las dos fes, judicial y extrajudicial, continuarán ejerciendo las mismas funciones, porque el título que tenía era de mero Teniente, y por lo tanto sujeto a revocación cuando el propietario lo tuviera por conveniente, en atención a haber cesado los motivos que le obligaron a delegar el ejercicio.

Conformándose con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, en sesión a que asistieron: D. Tomas Maria Mosquera, Presidente accidental; D. Feliciano Perez Zamora, D. Juan de Cárdenas, D. Ramon de Campoamor, D. Angel Maria Dacarrete, D. José Montero Rios, don Enrique de Cisneros, D. Fernando Guerra, D. José Maria Valverde, don Julian Garcia San Miguel, D. Escolástico de la Parra, D. Juan Facundo Riaño y D. Eusebio Page;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en dejar sin efecto la Real orden dictada por el Ministerio de Ultramar en 3 de Julio de 1887, y en declarar firme y subsistente el acuerdo de la Sala de gobierno de la Audiencia de la Habana de 3 de Noviembre de 1882.

Dado en San Sebastian a 24 de Agosto de 1888.—Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

Publicación.—Leído y publicado fué el anterior Real decreto Sentencia por el Excmo. Sr. D. Pedro de Madrazo, Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Audiencia pública celebrada por dicho Tribunal hoy 8 de Octubre de 1888.—Licenciado, Julian González Tamayo.

GOBIERNO DE PROVINCIA

CIRCULAR

Los señores Alcaldes de esta provincia, fuerzas de la Guardia civil, Agentes de vigilancia y demás dependientes de mi Autoridad, procederán a la busca y captura del preso fugado el 30 de Agosto último de la cárcel de Villena y cuyas señas son: José Beneito Susa, alto, delgado, cara redonda, de 25 años, pelo y ojos negros, barba cerrada, tartamudo, viste pantalon de algodón oscuro, blusa azul y calza alparagatas blancas cerradas y gasta sombrero hongo negro; es natural de Bocaliente y sufría prisión preventiva por tentativa de robo, reclamado por el Ilmo. Sr. Director general de Establecimientos penales; poniéndolo, en caso de ser habido, a disposición de este Gobierno.

Orense Septiembre 16 de 1890.

El Gobernador,
José M. GUERRA

DIPUTACION PROVINCIAL

Extracto de la sesión extraordinaria de 3 de Septiembre de 1890.

Abierta bajo la presidencia del

señor Reigada, se lee y aprueba el acta anterior.

En cumplimiento de la regla 7.ª de la circular de la Junta central del censo electoral de 8 de Agosto próximo pasado, y ajustándose estrictamente a lo en ella dispuesto, se procede a la elección, en votación por papeletas, de los cuatro señores Diputados que han de formar parte de la Junta provincial del referido Censo, tomando parte en el acto los veintitres señores Diputados asistentes, y habiendo dado el escrutinio el resultado siguiente: D. Ildefonso Fernandez, cinco votos; D. Ildefonso Meruéndano, cinco; D. Matias Bobillo, cinco; D. Plácido Colmenero Leras, cuatro; y D. José Lorenzo Gil, cuatro.

La Presidencia proclamó Vocales de la Junta provincial del Censo a los tres primeros de los expresados señores, anunciando que iba a procederse a la decisión del empate ocurrido por sorteo entre los Sres. Colmenero y Gil, conforme a lo dispuesto por el art. 65 de la ley provincial, aplicable al presente caso según resolución comunicada por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta central del Censo electoral con fecha 25 de Agosto próximo pasado en virtud de consulta que se le dirigió por telégrafo.

Los señores Taboada y Gil sostienen que debe aplicarse a la decisión del empate ocurrido el artículo 68 de la ley provincial; que la Junta central no tiene competencia para interpretar las leyes que no se refieren al Censo; y piden que la Diputación resuelva la duda en votación nominal.

El señor Meruéndano sostiene que la Junta Central es competente para interpretar todas las disposiciones y resolver todas las cuestiones que, como la presente, se refieran a la constitución de las Juntas provinciales; y que el artículo 65 es el único aplicable al presente caso, no solo por haberlo así declarado la Junta, sino por que es el que se refiere a la elección de personas y a las votaciones por papeletas.

Formulada por la Presidencia la pregunta: ¿Tiene aplicación el artículo 65 de la ley provincial a la decisión del empate ocurrido?, la Diputación resolvió afirmativamente por trece votos contra nueve, habiendo dicho sí: los señores Alem, Puga, Colmenero, Martínez, Fernandez (D. J.), Rodriguez Losada, Figueras, Oterino, Vazquez Gulias, Rivera, Meruéndano, Sieiro y el señor Presidente; y dijeron no: los señores Bustillo, Gil, Caamaño, Rey Vasadre, Fernandez D. Ricardo, Casanova, Taboada, Bobillo y Varela.

El Sr. Gil anuncia una protesta para el caso en que se resuelva por suerte el empate ocurrido.

El Sr. Presidente anuncia que se procede al sorteo entre los se-

ñores Colmenero y Gil para la decisión del empate ocurrido, el cual se entenderá resuelto en favor del Vocal cuyo nombre salga primero de la urna.

Fructificada la operación, y extraída la primera papeleta, que contenía el nombre del señor don Plácido Colmenero Leras, la presidencia declaró resuelto el empate en favor de dicho señor y le proclamó Vocal de la Junta provincial del Censo electoral.

En este acto entra el Sr. Gobernador y ocupa la presidencia, manifestando que en cumplimiento del segundo objeto de la convocatoria, y según lo preceptuado por Real orden de 4 de Agosto último, va la Corporación a deliberar acerca de las economías que hayan de realizarse en el presupuesto del actual ejercicio económico.

Se da lectura de un dictamen de la Comisión de Hacienda por el que se proponen las economías que expresa la relación que a continuación se copia.

Administración provincial.—Dietas de los señores Vocales de la Comisión provincial, cinco mil pesetas.—Servicios generales.—Gastos de impresión del *Boletín oficial* cuatro mil cuatrocientas cuarenta y cuatro pesetas, cuarenta y cinco céntimos.—Idem del servicio de bagajes, mil quinientas cincuenta y una pesetas.—Beneficencia.—Hospital.—Viveres, tres mil pesetas.—Combustible, mil.—Medicamentos, quinientas.—Ataúdes, doscientas cincuenta.—Obras y reparos, quinientas.—Inclusa.—Salarios de las nodrizas externas, dos mil quinientas pesetas.—Corrección pública.—Gastos de la Cárcel de la Audiencia del territorio, dos mil ciento ocho pesetas.—Idem de presos a disposición de la Audiencia de lo criminal de esta provincia, tres mil ochocientas cincuenta pesetas.—Otros gastos.—Subvención al Colegio de sordos-mudos y ciegos establecido en Santiago, mil pesetas.—Total de economías, veinte y cinco mil ciento tres pesetas, cincuenta y cinco céntimos.—Orense Septiembre 3 de 1890.—Fidel Varela.—Juan Taboada.—Vazquez.—Ildefonso Fernandez.

Puesto a discusión el preinserto proyecto, y no habiendo pedido la palabra ningún Sr. Diputado, se sometió a votación, y fue aprobado, quedando en consecuencia modificado el presupuesto ordinario del actual ejercicio en cuanto a los créditos a que afectan las economías relacionadas.

Acto continuo se dió lectura del proyecto de presupuesto extraordinario para los gastos que puedan ocurrir en la provincia en el caso de una invasión del cólera morbo, presentado por la comisión de Hacienda, y el cual a continuación se inserta.—Gastos.—para prevenir y combatir el cólera morbo, diez mil pesetas. Cuyos gastos se satis-

farán con parte del importe de las economías introducidas hoy al revisar el presupuesto ordinario del presente año económico.

Orense Septiembre 3 de 1890.
Juan Taboada.—Vazquez Gulias.
—Ildefonso Fernández.—Fidel Varela.

Abierto debate sobre el preinserto proyecto; y no habiéndose pedido la palabra, se sometió á votación y fué aprobado.

La presidencia declaró cumplido el objeto de la convocatoria y levantó la sesión.

El Presidente, Máximo García Reigada.—El Secretario, Claudio Fernández.

DELEGACION DE HACIENDA EN LA PROVINCIA DE ORENSE

La Direccion general de Contribuciones Directas en 27 del mes próximo anterior ha comunicado á esta Delegacion lo siguiente:

«Por Real orden dictada por el Ministerio de Hacienda con fecha 2 del corriente que aparece inserta en la *Gaceta* del 23 se ordena:

1.º Que ni el Banco de España ni las demás sociedades mercantiles y comerciantes puedan hacer devoluciones de metálico y valores depositados en sus Cajas, á los que funden su derecho en un título cualquiera hereditario, sino justifican haber satisfecho el Impuesto de Derechos reales correspondientes.

2.º Que igual requisito deberán exigir las sociedades y comerciantes para autorizar la transferencia de acciones por el título indicado:

3.º Que por si no estar formalizada la testamentaria no pudiese presentarse el título de adjudicación con la nota de pago del impuesto, pueden los interesados acudir á la oficina liquidadora, solicitando liquidación provisional respecto á los valores que quieran retirar ó transmitir presentando al efecto los documentos prevenidos por el art. 61 del Reglamento del Impuesto.

4.º Que las sociedades y comerciantes que no cumplan con las prescripciones 1.ª y 2.ª incurrir en una multa igual al 10 por 100 de los derechos que en caso de reincidencia se elevará al 25 por 100 y

5.º Que esta soberana disposicion se considere parte integrante del vigente Reglamento provisional del Impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes.

Lo que esta Direccion general comunica á V. S. para su inteligencia por medio de esta Circular de la que deberá acusar recibo y dar traslado al Administrador de Contribuciones y Liquidadoras del Impuesto, insertándola tambien en el *Boletín oficial* de la provincia.»

Y en cumplimiento de lo prevenido se inserta en este periódico oficial para la debida publicidad y fines correspondientes.

Orense 15 de Agosto de 1890.—El Delegado, Ignacio Vizcaino.

AYUNTAMIENTOS

Bade

Terminado por la Junta el reparto de consumos con separación del de líquidos, para el corriente año económico de 1890-91, por término de ocho días hábiles y á los efectos reglamentarios, queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento.

Bade Septiembre 14 de 1890.—El A. P., Nicanor Canal.

LOTERÍA NACIONAL

PROSPECTO DE PREMIOS

Para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 23 de Diciembre de 1890

Constará de 50.000 billetes, á 500 pesetas cada uno, divididos en DÉCIMOS á 50 pesetas: distribuyéndose 18.250.000 pesetas en 7.654 premios, de la manera siguiente:

PREMIOS	PESETAS
1 de	2.500.000
1 de	2.000.000
1 de	1.000.000
1 de	750.000
1 de	500.000
2 de 250.000	500.000
3 de 125.000	375.000
4 de 80.000	320.000
6 de 50.000	300.000
10 de 40.000	400.000
20 de 20.000	400.000
2.100 de 2.500	5.250.000
4.999 reintegros de 500 pesetas para los 4.999 números cuya terminación sea igual á la del que obtenga el premio mayor.	2.499.500
99 aproximaciones de 2.500 pesetas cada una, para los 99 números restantes de la centena del que obtenga el premio de 2.500.000 pesetas.	247.500
99 idem de 2.500 id., para los 99 números restantes de la centena del premiado con 2.000.000 de pesetas.	247.500
99 idem de 2.500 id., para los 99 números restantes de la centena del premiado con 1.000.000 de pesetas.	247.500
99 idem de 2.500 id., para los 94 números restantes de la centena del premiado con 750.000 pesetas.	247.500
99 idem de 2.500 id., para los 94 números restantes de la centena del premiado con 500.000 pesetas.	247.500
2 idem de 44.000 id., para los números anterior y posterior al del premio mayor.	88.000
2 idem de 28.000 id., para los números anterior y posterior al del premio segundo.	56.000
2 idem de 18.000 id., para los números anterior y posterior al del premio tercero.	36.000
2 idem de 12.000 id., para los números anterior y posterior al del premio cuarto.	24.000
2 idem de 7.000 id., para los números anterior y posterior al del premio quinto.	14.000
7.654	18.250.000

Las aproximaciones y los reintegros son compatibles con cualquier otro premio que pueda corresponder al billete; entendiéndose, con respecto á las aproximaciones señaladas para los números anterior y posterior de los cinco premios mayores, que si saliese premiado el número 1, su anterior es el número 50.000, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 será el siguiente.—Para la aplicación de las aproximaciones de 2.500 pesetas, se sobreentiende que si el premio mayor corresponde por ejemplo al número 25, el segundo al 3.400, el tercero al 13.073, el cuarto al 20.199 y el quinto al 49.915, se consideraran agraciados respectivamente los 99 números restantes de las centenas del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto; es decir, desde el 1 al 100, del 3.301 al 3.399, del 13.001 al 13.103, del 20.101 al 20.200 y del 49.901 al 50.000.—Tendrán derecho al reintegro del precio del billete, según queda dicho, todos los números cuya terminación sea igual á la del que obtenga el premio de 2.500.000 pesetas; de manera que si este cabe en suerte al número 803 ó al 804, etc., se entenderán reintegrados todos los que terminan en 3 ó en 4, ó sea uno por cada decena.—Al día siguiente de celebrarse el Sorteo, se exhibirán al público listas de los números que obtengan premio, único documento por el que se efectuarán los pagos, según lo prevenido en el art. 12 de la Instrucción del ramo, debiendo reclamarse con exhibición de los billetes, conforme á lo establecido en el 14.—Los premios se pagarán en las Administraciones en que se vendan los billetes.—Terminado el Sorteo se verificarán otros, en la forma prevenida por dicha Instrucción, para adjudicar los premios concedidos á las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia provincial de esta corte y á las huérfanas de militares y prietas muertos en campaña, cuyo resultado se anunciará debidamente.

Madrid 3 de junio de 1890.—El Director general, OLEGARIO ANDRADE.

ANUNCIOS

PÉRDIDA.—Habiéndosele extraviado á D. Francisco Hermida, residente en Orense, calle de Lepanto núm. 10, un perro de perdices, recastado, con pintas castañas y blancas, y en las últimas otras pequeñas negras, tiene toda la cola; y á quien se lo presente ó diga su paradero, se le gratificará.

A voluntad de sus dueños se vende una viña de diez cavaduras, con una mina con agua y tanque, casalagar y cerrada sobre sí, sita en la Cuenca, extramuros de esta ciudad.

Los que deseen adquirirla pueden dirigirse á la calle de Villar, núm. 10, piso tercero, hasta el día 20 del actual.

LA URBANA

COMPANIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS FUNDADA EN 1838

Fondos de garantía 224.000.000 de rs.

Tiene el honor de participar al público, que con fecha 16 de Julio último ha nombrado Director particular para esta provincia al Sr. D. M. Díez Villalobos, el cual tiene establecidas sus oficinas en esta ciudad, calle de Cisneros, núm. 5, 2.º

PASAJES GRATIS A CUBA.—Se contrata á los trabajadores de 16 á 40 años de edad que deseen emplearse en las canteras de hierro en Cuba, abonándoles buen jornal por el tiempo que les convenga, no bajando de seis meses, pasado cuyo plazo podrán rescindir ó renovar el contrato. Para mas informes, dirigirse á LA ACTIVIDAD, calle de Alba, núm. 19, Orense.

Venta de un caserío con una preciosa huerta de frutales para recreo y utilidad.

A voluntad de su dueño, se vende una gran casa, libre de todo gravamen en el pueblo y Ayuntamiento de Barbadanes, compuesta de varias salas, cuartos, alcobas, cuartos bodega, dos patios, dos cocinas y un local con horno para cocer pan al público con todos los enseres necesarios al efecto, y una huerta de 14 áreas con parrales, frutales y un tanque de agua permanente para lavar y regar, donde existe un colmenar, todo junto casa y huerta y con dos entradas.

Las personas á quienes convenga adquirir dicha finca, pueden enterarse en la misma casa, barrio de la Cal de dicho pueblo, y en Orense, calle del Progreso núm. 107, frente á la fuente del Puente Mayor de Orense, D. José Belon Carrete.

ESPEJOS.—Se venden dos magníficos ovalados de cuerpo entero, en precio sumamente ventajoso.

En esta imprenta darán razon.

Se vende la casa núm. 32 de la Calle del Instituto.

En la calle del Progreso, número 53 principal, darán razon.—24

VICICLETA

Se vende una en buen estado de uso, y por poco precio. Paz, 4, darán razon.

Imprenta LA POPULAR.